



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmplame informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Tal y como indica el Proyecto sometido a informe en su artículo 1, su objeto es la regulación de los servicios y las prestaciones económicas por grado de dependencia y los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios con arreglo al catálogo establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Debe recordarse, como punto de partida que la citada Ley establece en su artículo 4.2 d) que “las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes (...) a que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

De este modo, la Ley consagra como derecho esencial de las personas con dependencia su derecho a la protección de datos de carácter personal, lo que resulta de lógica inclusión en el artículo 4, teniendo en cuenta que la condición de persona dependiente implicará la existencia de determinada información relacionada con la salud de la misma, respecto de la que el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 impone un deber especial de protección, que justifica la exigencia de la concurrencia del consentimiento del interesado o de una habilitación legal específica para que dichos datos puedan ser objeto de tratamiento. Del mismo modo, esta especial protección se materializa en la exigencia de medidas de seguridad de nivel alto en el tratamiento de esos datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.3 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre.



Al propio tiempo, deben tenerse en cuenta las observaciones contenidas en el informe de esta Agencia en relación con el entonces Proyecto de Orden reguladora del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que no fueron tomadas en consideración en el texto final de la norma, especialmente en lo relativo a la limitación de los perfiles de los diversos usuarios del sistema, de modo que la información de los beneficiarios de los servicios o prestaciones económicas únicamente sea conocida por el personal de la Administración competente en relación con los mismos.

Hechas estas consideraciones previas las normas contenidas en el Proyecto que resultan relevantes desde el punto de vista de la normativa de protección de datos son las relacionadas con el contenido de las solicitudes de los servicios y prestaciones, establecido en el artículo 3 del Proyecto, y la regulación del traslado de la persona beneficiaria a una Comunidad Autónoma distinta de aquélla en que fue reconocida la prestación o el servicio, al que se refiere el artículo 18.

En relación con la primera de las cuestiones citadas, el contenido de la solicitud presentada implicará que el solicitante habrá de facilitar datos relacionados con la salud, consistentes en la determinación de si la persona está siendo ya atendida los servicios sociales y el tipo de servicio o prestación, si está siendo atendida por cuidados familiar, la indicación del tipo de discapacidad “si voluntariamente quiere manifestarlo” el solicitante, así como si tiene diagnosticada una enfermedad rara, catalogada como tal y la comunicación de los ingresos en centros hospitalarios y asistenciales.

La revelación por el afectado de estos datos a la Administración competente implicará el tratamiento por la misma de datos relacionados con la salud, debiendo contar con una habilitación legal para ello o con el consentimiento del interesado.

En este sentido, no debe perderse de vista que el artículo 4.1 de la Ley 39/2006 dispone que “Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma”, siendo requisito necesario para la concurrencia de la condición de beneficiario, conforme al artículo 5.1 a) “Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos” y desarrollándose en el artículo 26 los grados de dependencia y en el artículo 27 el modo de determinar el grado de dependencia conforme a los baremos a los que el precepto se refiere que necesariamente implicarán la concurrencia en los solicitantes de informaciones relacionadas con su salud, imprescindibles para evaluar la existencia de dependencia y el grado de la misma.



De este modo, el que las Administraciones que en cada caso resulten competentes puedan acceder a esta información sobre la base de su inclusión en el formulario correspondiente resulta ajustada a lo previsto en la norma, siendo lícito el tratamiento de los datos aun sin contar con el consentimiento específico al efecto del interesado, sin perjuicio de que la solicitud presume una aceptación de dicho tratamiento.

En todo caso, resulta necesario efectuar dos precisiones respecto del contenido del precepto:

- En primer lugar, si el conocimiento de las circunstancias del solicitante y su situación resulta necesario para la evaluación de si existe un grado de dependencia determinado que otorgue el derecho a una prestación o servicio, no parece lógico que se prevea que la información referente a la discapacidad del solicitante sea de aportación voluntaria. Esta referencia podría inducir a la consideración de que la información no resulta necesaria para la evaluación, en cuyo caso excedería del principio de proporcionalidad establecido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999. De este modo, si el conocimiento del grado de discapacidad es relevante para la valoración debería suprimirse la referencia a la voluntad del interesado solicitante del apartado d) del artículo 4.1.
- En segundo lugar, el que se considere que no es preciso el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos relacionados con la salud no impide que sea plenamente aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 en cuanto al cumplimiento del deber de información. De este modo, sería necesario que se previese que en los modelos de solicitud deberá constar una cláusula informando al interesado acerca del tratamiento de sus datos y su incorporación al Sistema de Información, con el alcance y contenido del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

La segunda de las cuestiones a las que se hizo referencia con anterioridad es la relativa al traslado de la persona beneficiaria, estableciendo el artículo 18 un procedimiento de notificación por vía del traslado en el plazo de los diez días anteriores al mismo a la Administración que hubiera reconocido el derecho, que lo podrá en el plazo de cinco días en conocimiento del IMSERSO para que el mismo comunique el traslado a la Administración de destino, que deberá proceder a revisar el programa individual de atención al beneficiario en el plazo de sesenta días.

En este supuesto existirán distintas cesiones de datos relacionadas con la condición de beneficiario del interesado y las prestaciones o servicios de los que aquél resulte ser beneficiario, pudiendo no obstante considerarse que en tanto las mismas se realicen entre las Administraciones de origen y destino y



del IMSERSO las cesiones se encontrarán amparadas por el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999 al ostentar o haber ostentado cedentes y cesionarias las mismas competencias en relación con el citado beneficiario, por lo que ninguna objeción cabe efectuar a esta segunda norma objeto de análisis en el presente informe.